CAPITULO V

EL FUNDAMENTO JURÍDICO

Otro de los fundamentos clave de la política educacional es el fundamento jurídico. Y la política educacional *debe revisar este fundamento*, cuyas exigencias - Junto a las del derecho educacional - constituyen elementos estratégicos en todo proceso de transformación educativa.

El derecho educacional

Para que el derecho educacional pueda cumplir una tarea importante en una política transformadora de la educación, es conveniente tener en cuenta los siguientes *presupuestos y tareas*:

- Que se lo considere como un *complejo normativo abierto* que responda a las necesidades de una sociedad en transformación y en busca de nuevos modelos culturales, entre ellos los jurídico-educativos. Es preciso superar, entonces, las concepciones que ven en el derecho un sistema jurídico cerrado y sin posibles contactos con la realidad.
- Que el derecho educacional *forme parte del proceso social global*, en el que la educación tiene un papel estratégico, y no sea una "legislación escolar" fragmentaria, interesada solo en responder a las cuestiones o conflictos internos de las instituciones educativas. Se trata de no identificar al derecho con los procesos de gestación de leyes aisladas, que suelen ser un obstáculo para los cambios y el desarrollo de la educación y los sistemas escolares.
- Que el derecho educacional *forme parte del mundo jurídico multidimensional*, considerado como una red de relaciones complejas que se desprende de la relación básica "hombre-sociedad-cultura-derecho". En el caso del derecho educacional, también son elementos clave los fundamentos antropológicos, sociales, culturales, éticos y jurídicos de la política educacional, por cuanto configuran una relación específica entre el derecho y la educación.
- Que sea el *complejo de normas* que regule los procesos educativos y sus instituciones, pero inserto en un mundo jurídico dinámico, coherente y vital, donde se reconozcan los derechos fundamentales en materia educativa a los padres, a los docentes, a los alumnos y al Estado.
- Que este complejo normativo sea un *derecho configurador de espacios sociales y políticos de libertad* para la iniciativa y la participación creadora, no solo un instrumento coactivo de control social. Es decir, que ofrezca garantías reales a las libertades jurídicamente protegidas - que no siempre se conocen o utilizan - y que identifique con claridad las necesidades sociales que debe satisfacer y los derechos que garantiza.

- Que desempeñe con eficacia su *tarea social legitimadora* organizando el poder social de la educación, distribuyendo el poder de decisión (político, económico y jurídico), fijando reglas de competencia, otorgando atribuciones y garantizando la justicia y la libertad.
- Que se valore al derecho educacional como *uno de los factores clave del cambio educativo*, para lo cual es necesario rechazar dos concepciones. En primer término, la idea mítica de la ley, según la cual su mera promulgación produce un cambio educativo; es una idea que aparece unida a alguna tradición de la legislación escolar" y de la política jurídica argentinas. Y en segundo lugar, aquella que cree que las normas jurídicas no son instrumentos idóneos y eficaces para promover o acelerar los cambios sociales.
- Que se tengan en cuenta sus importantes *responsabilidades sociales*, por cuanto configura y garantiza nuevas condiciones de vida. El derecho no solamente regula la conducta en situaciones existentes en la realidad, sino que también crea proyectos de convivencia capaces de organizar el futuro y orientar las expectativas, las actitudes y los comportamientos.
- Por último, que todos estos presupuestos y tareas estén apoyados en una *ética jurídica* configurada por el conjunto de principios, valores y criterios ético-jurídicos articulados de una manera práctica y eficaz con las situaciones históricas concretas y con los complejos problemas de las sociedades contemporáneas.

La política jurídica

Por su parte, la *voluntad ética* que anima al derecho debe entenderse como una *fuerza social* que lucha por la justicia y que debe culminar con el reconocimiento jurídico de todos los principios y derechos humanos para todos los pueblos. En otras palabras, no debe ser concebida como una fuerza simplemente individual.

El derecho está obligado a atender, también, tres aspectos importantes que hacen a cuestiones prácticas. El primero, *perfeccionar la política jurídica*, reconociéndola como la actividad que, a partir de las finalidades establecidas por la política educacional, analice la conveniencia, oportunidad y posibilidad de efectuar cambios en el ordenamiento jurídico. Para ello es necesario llevar a cabo una profunda investigación, a fin de hacer un pronóstico realista acerca de la viabilidad de la ley y de sus posibles efectos, así como de la eficacia del cambio jurídico propuesto para justificar la decisión política del legislador.

El segundo, *perfeccionar* la técnica legislativa teniendo en cuenta que la ley es una estructura con principios, ideas, valores, mandatos, sanciones, etcétera, que debe tener una armazón técnica, una capacidad organizativa y un lenguaje técnico preciso.

Por último, incorporar *al currículum de las instituciones educativas el fundamento jurídico*, en el que se aborden la reflexión, el análisis y la investigación sobre el significado del derecho educacional como uno de los elementos estratégicos para la construcción de un mundo jurídico complejo y multidimensional.